

RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

Al igual que la mayoría de los países del Este de Europa, Rumanía se enfrenta a riesgos de quiebra por causa de la crisis financiera internacional.

Las tres notas más características de la crisis que amenaza al Este de Europa son, por una parte, el estancamiento de las exportaciones (con un abultado déficit por cuenta corriente) hacia occidente, la caída de las inversiones extranjeras y la reducción del crédito por parte de los bancos occidentales. Junto a ellas, la caída de la moneda local frente al euro y amenazas colaterales como incremento de la inflación y del paro.

El panorama presentado por los países del Este, y por tanto por Rumanía, es el siguiente: desplome de la moneda local (desde un 25% en Hungría, en medio año, a un 15% en Rumanía) lo que amenaza con incrementar la morosidad, debido al alto porcentaje de préstamos concedidos por los bancos en euros y francos suizos (la mitad de una deuda externa privada que va desde 10.000 millones de euros en Hungría a casi 30.000 en Rumanía). El déficit por cuenta corriente aumenta conforme caen las exportaciones (más del 10% en Rumanía). La demanda interna se contrae a toda velocidad, las remesas de los emigrantes disminuyen de golpe y la amenaza del paro se cierne a pesar de las expectativas de crecimiento por los fondos comunitarios que deberían llegar a los últimos países aceptados como miembros de la UE.

Por lo que respecta a Rumanía, el presidente del Banco Nacional, Mugur Isarescu, ha señalado que mientras que el sector gubernamental tiene capacidad de financiación de manera interna, el sector privado tiene un “vacío de financiación”, refiriéndose a una deuda que constituye ya el 42,4 % del PIB.

Por su parte, el Banco Mundial acaba de remitir un informe al gabinete rumano, recomendando diversas medidas de ajuste, que se resumen en lo siguiente:

Necesidad de limitar a corto plazo el incremento salarial sujetándolo a la inflación, a fin de evitar el riesgo de una espiral de deterioro inflacionista. La entidad financiera ha señalado también que la ausencia de una estrategia coherente en el ámbito de los salarios del sector público, puede llevar a los sindicatos a una dinámica de exigencias de aumentos salariales en todos los sectores de la economía.

Asimismo, ha expresado la absoluta necesidad de contener el déficit. Aunque ha admitido que el incremento de los salarios del personal de la Enseñanza es necesario, éste es inaceptable si no va acompañado de medidas de reforma del sector, relacionadas con el desequilibrio entre el número de profesores y de alumnos y la obligada adaptación de los “currícula” a las necesidades del mercado laboral.

En el capítulo dedicado a las pensiones, el Banco Mundial, tras señalar la ausencia de normas destinadas a “indexar” la cuantía de las mismas, que puede llevar a una gran vulnerabilidad del sistema en caso de presiones

políticas, ha anotado que los significativos incrementos del 2007 y del 2008 pueden provocar un déficit importante en el sistema de pensiones.

Estas y otras advertencias, revisten una singular importancia en un momento en que, tras descartar inicialmente la necesidad de recurrir a financiación internacional, las autoridades rumanas se encuentran ya en Washington en negociaciones preliminares con el FMI para recabar una ayuda que parece puede alcanzar los 7.000 millones de dólares y que, obviamente, sólo será concedida, según la tradición de dicha institución crediticia internacional, si va acompañada de medidas de austeridad en línea con las señaladas por el Banco Mundial. En cualquier caso, la ayuda concedida por el FMI sería complementaria y compatible con la que en su momento pueda prestar la UE del fondo de 24.000 millones de euros aprobado para combatir el déficit de la balanza por cuenta corriente. Como las instituciones comunitarias no disponen de mecanismos de control del desarrollo de los préstamos, la única institución capaz de monitorizar su utilización sería el FMI, lo que hace imprescindible su intervención en cualquier operación. Sin embargo, algunas voces ya han comenzado a alzarse en contra de una solución que pase por el FMI. Los sindicatos ya se han pronunciado en contra, lo cual era de esperar, vaticinando un desencadenamiento de conflictos sociales en Rumanía. Pero resulta aún más significativo que incluso el líder del PSD, Mircea Gheoana, cuyo partido participa en un 50% en la coalición de gobierno, haya expresado públicamente su preocupación, señalando que espera que el “cinturón de seguridad” para la economía que pueda suponer un préstamo del FMI (en referencia a unas declaraciones del Jefe del Estado) no se convierta finalmente en “un cinturón de castidad”.

El gobierno rumano que formó coalición tras los resultados electorales de finales del 2008, parece encontrarse, pues, en una encrucijada en la que, tras insistir hasta hace pocos días en la solidez de su sistema bancario y negar una y otra vez la necesidad de recurrir a la ayuda internacional, ha tenido que rendirse a la evidencia de que, si bien la deuda pública (1.600 millones de euros) resulta plenamente asumible en las actuales circunstancias, el inmenso pasivo de la deuda privada (24.000 millones de euros) no le deja otro camino que solicitar ayuda internacional, con lo que se convertirá en el tercer país de la UE que lo haga, tras Hungría y Letonia.

Los preliminares de la conflictividad social que puede crearse en el país, están servidos. Nada más constituirse el gobierno, y al presentar el proyecto de presupuesto para el 2009, ya tuvo que reconocer por boca del Ministro de Trabajo, Marian Sarbu, “que la demagogia de la campaña electoral no iba a poder sostenerse”. De entrada, el 50% de incremento salarial para los funcionarios se quedó en un 5%, la misma cifra que para el prometido incremento de las pensiones. El pago de horas extras se sustituirá con días libres, con el objetivo de reducir un 20% de los gastos de la Administración Pública. Por causa de estas medidas, ya ha tenido que encarar una primera protesta de los empleados públicos, que se saldó con un paro general de dos horas que fue seguido por 25.000 funcionarios el pasado 2 de marzo y que amenaza con generalizarse en una nueva convocatoria para el próximo 11 de marzo. Las recientes declaraciones de los líderes sindicales tras la decisión de solicitar ayuda al FMI auguran un futuro aún más oscuro. El futuro dirá también si las declaraciones del líder del PSD, curándose en salud respecto a las consecuencias sociales que puede generar la ayuda internacional se habrán

quedado simplemente en un comentario “chusco” o, por el contrario, indican la posibilidad de una fisura en la coalición si las cosas se ponen muy mal para el gobierno.

Por último, otro dato sorprendente es que en contraste con las medidas de austeridad social adoptadas en presupuesto finalmente aprobado, éste se ha disparado en el capítulo de inversiones públicas en infraestructuras, a las que se atribuye un 20% del gasto, es decir, unos 10.000 millones de euros para carreteras, rehabilitación de bloques de pisos construidos en la época comunista, construcción y modernización de sistemas de abastecimiento de aguas, así como inversiones en los sectores de sanidad y educación. En el 2008 se invirtieron 4.000 millones de euros en infraestructuras. Este año, la cifra sube a 10.000. El gobierno pretende financiar estas inversiones con cargo a los fondos europeos, pero algunos analistas piensan que sólo va a ser capaz de atraer fondos por un importe de 2.000 millones. Si no se cubren los gastos, el gobierno deberá incrementar el déficit (lo que no cuadra con las restricciones que esperan ver las entidades financieras internacionales) o se verá obligado a efectuar correcciones en el Presupuesto, comprometiendo así el crecimiento económico del 2% que ha prometido.